

**I. PRESENTACIÓN DEL INFORME EL LABERINTO DEL
PODER. TRAYECTORIAS DE LEGISLADORAS CHILENAS.**
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Noviembre del 2021

Contexto

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa la búsqueda de la paz y la justicia mediante instituciones democráticas sólidas bajo la convicción de que ello solo será posible si estas instituciones, especialmente aquellas destinadas a representar las demandas y deseos de los pueblos, reflejan la diversidad de actores que los componen. Una de sus metas, enfocada en la igualdad de género, tiene por fin a asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

En ese contexto se inscribe este estudio de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre TRAYECTORIAS DE LEGISLADORAS CHILENAS. En él se da cuenta de las rutas que han debido seguir las mujeres para acceder al Congreso, retratando en detalle las circunstancias y barreras que las parlamentarias chilenas han debido sortear durante la última década para llegar a convertirse en diputadas y senadoras. En el se aportan importantes datos y reflexiones que el país en esta etapa histórica que el proceso constitucional abre para Chile.

¿Cuál es el estado de la cuestión al realizarse el estudio?

El PNUD por medio de sus estudios ha mostrado que los cambios habidos en Chile en las relaciones de género no se traducen automáticamente en transformaciones de las estructuras y la distribución del poder.

Sin duda ha habido avances durante la última década. Chile experimentó un acelerado cambio cultural favor de la igualdad de género, hemos asistido a una “primavera feminista” y ello ha servido de impulso a imprescindibles reformas legales en el ámbito de la representación política.

En materia cultural:

1. Aumentó sustantivamente el desacuerdo con las representaciones tradicionales sobre los roles de género, sea la idea de que la responsabilidad de mantener económicamente el hogar es siempre de los hombres o la de que la responsabilidad de cuidar la casa y los niños es siempre de las mujeres.
2. Creció el apoyo ciudadano a medidas que promueven el acceso de mujeres a cargos directivos en la esfera pública y en grandes empresas privadas.
3. Disminuyó el apoyo a la idea de que los hombres son mejores líderes que las mujeres.
4. Y aumentó la percepción de que mejoraría la forma de hacer política si hubiera igual número de mujeres y hombres en cargos de poder político.

La expansión del feminismo en tanto conjunto de ideas y organización política de las mujeres, se vigoriza con el ciclo de movilizaciones iniciado en 2011 por el movimiento estudiantil, y se consolida hacia mediados de 2018 en lo que se conoce como una “primavera feminista”. Esta logró transformar el debate público y permear discusiones cotidianas sobre sexismo, acoso, la violencia experimentada por las mujeres en todas las esferas de sus vidas; obligó a instituciones de todo tipo a revisar protocolos y políticas, y amplió el piso simbólico de apoyo para un discurso y una agenda de promoción de la igualdad de género.

Ello explica que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2019 se convirtiera en la movilización callejera de mujeres bajo una plataforma feminista más masiva en la historia del país, con casi dos millones de asistentes en distintas ciudades. Durante el “estallido social” de ese mismo año, la movilización feminista no sólo se mantuvo, sino que dotó de gran visibilidad el discurso y las demandas feministas en ese proceso. Cómo olvidar, la réplica nacional e internacional de la performance de Las Tesis. Su canción, su coreografía e iconografía se convirtieron en un fenómeno mundial y multitudinario, constituyéndose es un potente himno feminista en contra de la violencia de género.

En el ámbito del poder formal, se registran dos importantes avances: La regla de paridad establecida para las candidaturas a senadores y diputados en el año 2015; y el criterio de paridad establecido no solo en las candidaturas sino también en los resultados incorporado en la elección de Convencionales Constituyentes recién el pasado año 2020.

La Ley N ° 20.840 que sustituyó el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo, incorporó un principio de equilibrio de género en las listas de candidaturas que presenten los partidos políticos a diputados y senadores,

hayan pactado o no, conforme al cuál, ningún sexo podrá superar el 60% de la totalidad de las candidaturas en todo el país, independientemente de la forma de nominación. No hacerlo implica el rechazo de toda la lista presentada¹. La llamada “cuota de género”, sin embargo, tiene un carácter transitorio en tanto la ley plantea su aplicación por cuatro elecciones consecutivas, comenzando en 2017.

Los resultados de las elecciones parlamentarias de 2017 mostraron un importante avance en la representación política de las mujeres: En el Senado se eligieron 10 senadoras, aumentando el porcentaje de representación a un 23,3% del total. En la Cámara de Diputadas y Diputados, el aumento fue de un 22,6 % del total, pues de los 155 cupos, 35 fueron para mujeres. Entre la elección de 2014 y la de 2017, el aumento fue de casi 7 puntos porcentuales, es decir, en una sola elección se logró un aumento cercano a lo logrado en dos décadas y siete elecciones.

Por su parte, la Ley N ° 21.216 de 24 marzo del 2020 modificó la carta fundamental para garantizar la paridad de género en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente. Sin embargo, no podemos pasar por alto, que a pesar del apoyo a las demandas feministas y del creciente protagonismo de las mujeres en las movilizaciones sociales, dicha reforma no había incorporado medidas que permitieran una representación inclusiva de toda la sociedad: mujeres, independientes y pueblos originarios estaban excluidos. De este modo, su inclusión fue parte del debate político desde el mismo 15 de noviembre, transformándose en una demanda transversal en contra de las exclusiones dentro y fuera de los partidos políticos y del Congreso, en organizaciones de mujeres, el movimiento social, y un amplio apoyo desde la ciudadanía. Sólo así, la representación paritaria, y una mínima consideración a la interseccionalidad, permitieron el acceso de mujeres que, por razón de género, etnia o no afiliación a un partido político, jamás habrían obtenido un espacio de representatividad.

De esta forma Chile, que fue uno de los países más tardíos en aprobar una ley de cuotas en América Latina y el Caribe, se transformó en el primer país del mundo en contar con un órgano constituyente con paridad de género: 77 de 155 convencionales electas en mayo de 2021 fueron mujeres

Permanencias.

¹ La norma establece un incentivo adicional a través del financiamiento de campañas para promover que, más allá del porcentaje de candidatas, los partidos nominen a mujeres en cupos elegibles. Se exige que el 10% del financiamiento estatal a los partidos se destine a actividades que promuevan la participación política de las mujeres, se otorga un reembolso extra a las candidatas de UF 0,01 por cada voto obtenido, para gastos electorales, a los partidos se les entrega un beneficio de 500 UF por cada candidata electa.

Con todo, subsisten permanencias culturales que se constituyen en escollos para el acceso de las mujeres al poder. La última elección simultánea para cargos constituyentes, donde se aplicaba una estricta paridad de entrada y salida; y para cargos de gobernadores y alcaldes, sin esa exigencia, muestran que si bien existen candidatas calificadas, disponibles y competitivas para todos los puestos de representación, y las cuotas permitieron que hubiese más mujeres en las listas, estas experimentaron fuertes desventajas y no se alcanzó un equilibrio efectivo en el resultado.

Las solas cuotas no logran que los partidos abandonaran los sesgos de género a la hora de privilegiar candidaturas. De modo que, si no están obligados, los partidos vuelven a las prácticas de exclusión y privilegian a candidatos hombres.

Por tanto, instalar una estricta paridad de entrada y salida para las elecciones a todos los cargos públicos, es una medida imprescindible.

Hipótesis inicial del estudio.

Pues bien, en este contexto de avances y permanencias, el estudio que les presento tiene como hipótesis inicial que: si bien la presencia de las mujeres es central para asegurar una adecuada representación de género, por sí sola no cambia las dinámicas de poder, ni elimina los bloqueos y el clima adverso que enfrentan cuando llegan a ocupar puestos de liderazgo político formal.

A partir de dicha hipótesis, el estudio analiza en profundidad, a partir de datos cuantitativos y cualitativos, los múltiples obstáculos que las mujeres deben sortear en su trayectoria llegar a ocupar un cargo parlamentario en Chile.

Metodológicamente se construyó el estudio a partir de una base de datos con todas las personas que ejercen o han ejercido como autoridades legislativas en los últimos cuatro períodos legislativos (2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022), base que se completó en enero de 2019, por lo que no incorpora cambios en la composición del Congreso después de esa fecha. Y se nutre, además, de 28 entrevistas en profundidad realizadas a 25 diputadas y tres senadoras de distintas tendencias políticas. Se estructura en 4 capítulos.

¿Cuál es su contenido esencial?

La investigación describe quiénes son las mujeres que han integrado el Poder Legislativo chileno durante los últimos cuatro períodos, y las trayectorias políticas que las condujeron al Congreso. A partir de los conceptos de laberinto del poder y de régimen de género masculinizado, da cuenta, por un lado, de los obstáculos que enfrentaron para ser nominadas y ganar elecciones y de los

elementos facilitadores que les permitieron sortearlos, y por el otro, refiere los escollos que han de superar en el ejercicio de sus cargos de representación.

El estudio evidencia que los obstáculos para un proceso de ascenso continuo, no se circunscriben a un único momento , o a un problema específico, sino que constituyen un auténtico laberinto por el que han de transitar para acceder a un cargo de representación parlamentaria, y demuestra que , una vez conseguido, han de enfrentar permanentemente el régimen de género masculinizado, existente en el Congreso Nacional.

¿Qué significa que su acceso al poder sea un laberinto?

Que las trayectorias que las legisladoras chilenas han construido para llegar al Congreso a lo largo de sus vidas, están plagadas de múltiples barreras, sesgos y procesos de negociación, tanto en el ámbito público de la política como en sus vidas privadas, en sus familias, en sus organizaciones sociales de origen y en la esfera laboral.

El conjunto de esas barreras y puntos de inflexión, así como la agencia y las estrategias que cada mujer despliega para hacerles frente, configuran lo que el estudio nomina un verdadero laberinto del poder: “campo de acción marcado por construcciones simbólicas y materiales basadas en una división sexual del trabajo, de los roles e identidades que se atribuyen y esperan de hombres y mujeres en la sociedad chilena, y en particular en la esfera de la política formal”.

¿Qué significa que en el ejercicio de su mandato enfrentan un régimen de género masculinizado?

Que una vez electas, sus opiniones y saberes son permanentemente objeto de cuestionamiento y menosprecio, y deben luchar cotidianamente para que sus aportes sean reconocidos de igual forma que los de sus pares hombres. A la vez significa que han de lidiar con medios de comunicación, redes sociales y un debate público plagados de sesgos de género. Por último, quienes ocupan cargos de poder no pueden sustraerse a la división sexual del trabajo en los ámbitos familiar, social, laboral y político, y tienen que equilibrar presiones para cumplir con lo que se espera de ellas en sus distintos roles.

Principales Hallazgos del Estudio.

Pueden resumirse en 6 ideas principales:

1. La llegada de más mujeres al Congreso ha contribuido a incrementar la diversidad de las autoridades legislativas y a reducir la elitización de ese poder del Estado. Sin embargo, la diversidad aún es limitada.
2. No existe una ruta única para llegar al Congreso Los cargos públicos son la principal puerta de entrada de las mujeres al Congreso. Pero, persisten importantes brechas de género en cargos con mayor incidencia y visibilidad.
3. El Congreso es una institución generizada que prolonga el laberinto que deben recorrer las mujeres en el ejercicio de su cargo legislativo.
4. Los partidos políticos son centrales en la posibilidad de las mujeres de llegar al Congreso, pues condicionan su acceso a las cúpulas partidarias y determinan su presencia en la oferta electoral y el financiamiento y apoyo que les otorgan durante las campañas.
5. Las reformas legales de los últimos años han sido eficaces para aumentar la proporción de mujeres en el Congreso, pero no consiguen por sí solas erradicar todos los obstáculos que enfrentan las mujeres en el laberinto del poder.
6. La conciliación entre las tareas de cuidado, el trabajo reproductivo y el ejercicio del liderazgo político es un tema recurrente en los relatos de legisladoras. Las presiones, expectativas y sesgos de los entornos familiares y sociales son lo que estructura parte importante del laberinto del poder.

Respecto del contenido específico del Estudio:

El Capítulo 1, titulado “Las parlamentarias chilenas: cambios y continuidades (2006-2010 / 2018-2022)”, da cuenta de que en poco más de quince años el Congreso chileno ha tenido grandes cambios en virtud de los cuáles hoy refleja de mejor manera la diversidad de la sociedad chilena, principalmente por la inclusión de más mujeres.

Dentro de los cambios positivos, que vigorizan la democracia chilena, se cuentan una deselitización del Congreso pues existe una proporción menor de parlamentarias provenientes de colegios particulares pagados y que egresan colegios y carreras de elite. También un aumento de representantes de regiones, pues las parlamentarias provienen de regiones en mayor número más que los varones. Asimismo, ha aumentado la proporción de parlamentarias que han sido dirigentes sociales, especialmente en el mundo estudiantil y se ha dado un rejuvenecimiento de la representación, pues las parlamentarias en promedio se caracterizan por ser más jóvenes que sus pares hombres. A su vez, la presencia de mayor cantidad de partidos, que representan distintos sectores sociales, ha permitido que se diversifique la representación desde donde emergen las candidaturas femeninas.

En cuanto a datos negativos, que revelan desigualdades de género permanentes, se evidencian diferencias en temas de filiación. Las parlamentarias están casadas en menor proporción que los parlamentarios y en promedio tienden a tener menos hijos e hijas o a no tener ninguno. En parte la razón es el aumento de mujeres jóvenes por la entrada de nuevas generaciones al Congreso. Pero también es por la brecha en la carga de trabajo reproductivo ligada a labores del hogar y cuidado de familiares.

El Capítulo 2, titulado “Las rutas al poder: un análisis de las trayectorias previas de las legisladoras”, entrega datos que permiten comprender todos los factores que posibilitaron, y los que todavía obstaculizan, el arribo de nuevas parlamentarias al Congreso Nacional.

Posibilitan su acceso, el desempeño previo de cargos en el sector público; una militancia prolongada y el desempeño previo en múltiples cargos en el ámbito de la política institucional; redes de parentesco con personas históricamente vinculadas a la política; y la visibilidad que otorga el desempeño en el mundo de las comunicaciones y la cultura.

El estudio confirma la relevancia del vínculo territorial en las trayectorias de las legisladoras chilenas, pues da cuenta de que el ejercicio previo de cargos en el nivel municipal, en particular en concejalías, facilita su acceso al parlamento, a diferencia del ejercicio de cargos en el Ejecutivo central que es minoritario. Sin embargo, también evidencia que constituye una barrera, la persistencia de la brecha de género en los cargos de jerarquía, como las alcaldías, que otorgan mayor visibilidad a nivel municipal y en la administración del Estado, en cargos de jefatura que por su naturaleza directiva implican el manejo de recursos económicos y la adquisición de competencias de liderazgo. Mismas brechas en las jerarquías que se replican en el sector privado, pues los parlamentarios han tenido en mayor medida que las parlamentarias cargos de propiedad o directivos. Y, por el contrario, ellas superan ampliamente a los hombres en los cargos profesionales.

Obstaculiza también su acceso al poder, la ocurrencia de la llamada “brecha de ambición política”, entendida como la escasa planificación que ellas declaran al referirse al futuro. Rasgo que tiene una clara dimensión de género, pues los estudios existentes atribuyen la menor ambición política de las mujeres al proceso de socialización y más específicamente a la persistencia de estereotipos de género que sancionan a las mujeres que expresan interés por tener cargos de poder y, por el contrario, valoran a los hombres que manifiestan lo mismo.

Por último, la introducción de un mecanismo de cuotas electorales de género parece haber propiciado el surgimiento de un nuevo tipo de carrera política, al permitir que lleguen al Congreso mujeres jóvenes procedentes del mundo social,

y cuya trayectoria se compone sobre todo de cargos en estructuras y movimientos estudiantiles y en sus respectivos partidos políticos.

El Capítulo 3, nominado “Partidos políticos: los porteros del Congreso”, da cuenta del rol clave que han tenido los partidos políticos en el acceso de las mujeres a cargos legislativos, y de que a pesar de la ley electoral que incluye cuotas obligatorias, persisten prácticas que subvierten el horizonte de igualdad de género que inspiró esta ley: la reproducción de la división sexual del trabajo al interior de los partidos -incluyendo la organización de la vida partidaria en horarios que dificultan la conciliación entre la vida pública y los roles de cuidado-, la ausencia de mujeres en las mesas negociadoras de candidaturas y la prevalencia de estereotipos de liderazgo que reproducen el carácter masculinizado de la política.

Los partidos también condicionan las posibilidades de las mujeres de integrar las cúpulas partidarias. Los análisis muestran que, si bien ellas acceden crecientemente a cargos directivos en estas organizaciones, todavía suelen ser cargos del tipo no estratégico, como los relacionados con los asuntos internos del partido, y por el contrario su proporción disminuye a medida que se avanza hacia cargos más estratégicos y con mayor incidencia, como las secretarías generales o los espacios a cargo de la selección de candidaturas.

Junto a lo anterior, el capítulo identifica los factores que, desde la perspectiva de las parlamentarias entrevistadas, permitieron que fueran nominadas: las redes partidarias, la construcción de vínculos territoriales, la visibilidad pública, el interés de los partidos por promover liderazgos jóvenes, y muy especialmente la entrada en vigor de la nueva ley electoral, que incluye cuotas obligatorias. Por último, se describieron las campañas electorales como una de las etapas más complejas del laberinto del poder que transitan las mujeres en su camino al Congreso, por el carácter sexista y hostil que caracteriza a estos procesos, por las dificultades para conciliar la vida política y la vida familiar, y finalmente por la importante brecha de financiamiento en desmedro de las mujeres.

En base a esos resultados, el estudio lanza varios desafíos para los partidos políticos si se quiere alcanzar la igualdad de género en el Congreso: En primer lugar, señala que es central que promuevan la incorporación de mujeres a las cúpulas partidarias, y especialmente en cargos estratégicos y con capacidad de incidencia en los procesos de selección y nominación de candidaturas. En segundo lugar, se concluye que los partidos deben adoptar mecanismos explícitos que garanticen la igualdad de financiamiento y combatir los sesgos de género y el sexismo en las campañas electorales. Por último, deben afrontar de manera reflexiva el conjunto de prácticas, reglas informales y estereotipos que

contribuyen a reproducir el carácter masculinizado de la política. Contribuiría a ello la adopción de códigos éticos y de conducta, de protocolos sobre acoso sexual y toda forma de discriminación, que incluyan sanciones efectivas. Todos esos aspectos que han demostrado ser altamente resistentes al cambio, sitúan a la dimensión cultural como uno de los desafíos cruciales a abordar por los partidos políticos si hay compromiso real con la igualdad de género en materia representativa.

El Capítulo 4, titulado “El laberinto dentro del Congreso” muestra que las vicisitudes que deben recorrer las mujeres para llegar al Congreso no terminan una vez que asumen como parlamentarias, sino que continúa en el ejercicio del cargo dentro del Congreso. Los parlamentos en general tienen un carácter masculinizado: no solo hay más hombres, incluyendo a los funcionarios, sino que se organizan en función de prácticas que los favorecen a ellos. Nuestro Congreso no es la excepción: es una organización generizada y actúa con un régimen de género masculinizado, tanto respecto de las parlamentarias como de las funcionarias.

Son evidencias de ello, la diferenciación jerárquica basada en género o el menor acceso de las parlamentarias a cargos de poder y autoridad, como mesas directivas y jefaturas de bancadas, así como la diferenciación horizontal basada en género que implica la existencia de comisiones permanentes feminizadas y masculinizadas, así como otras donde simplemente no ha habido mujeres. Sin perjuicio de que en los últimos dos períodos ha habido algunos cambios en el acceso a cargos de autoridad y poder en ambas cámaras.

El régimen de género del Congreso también se expresa en el transcurso cotidiano del proceso legislativo: las parlamentarias son invisibilizadas, refieren tener que trabajar el doble para ser reconocidas; un buen número de entrevistadas decide adoptar estilos de liderazgo que califican como masculinos; y son las entrevistadas más jóvenes, las más claras para hablar de machismo o micromachismos, ejemplificando con situaciones concretas.

Como muestra la literatura, para que las mujeres puedan empezar a cambiar las lógicas de funcionamiento de las organizaciones deben conformar al menos entre un 15% y 40% de la institución, para pensar en conformar una masa crítica, de modo que queda mucho camino por recorrer. El camino, sin embargo, es claro: desmasculinizar el Congreso, sus procedimientos y prácticas.

Esta investigación constituye una gran herramienta para dar a conocer todo lo que aún falta avanzar en la igualdad de género, no sólo en el acceso al cargo de parlamentaria sino también en su ejercicio. Por lo mismo felicito al equipo que lo hizo posible.

II. OFICIO A MINISTRO DE JUSTICIA POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA INCORPORACIÓN ADMINISTRATIVA URGENTE DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA EN LOS QUE SE CUMPLEN CONDENAS AL RÉGIMEN JURÍDICO QUE LES CORRESPONDE Y LA DESTINACIÓN DE PROFESIONALES REQUERIDOS EN EL CENTRO DETENCIÓN PREVENTIVA SANTIAGO 1 PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PSICOSOCIALES QUE REQUIEREN LOS CONDENADOS QUE CUMPLEN EN SUS CONDENAS EN DICHO RECINTO.

Valparaíso, 4 de noviembre del año 2021

De: XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Presidenta del Senado.

A: Señor HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, Ministro de Justicia y DDHH.

XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Presidenta del Senado a HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, Ministro de Justicia y DDHH señalo:

1. He tomado conocimiento de la situación que afecta a las personas condenadas que se encuentran cumpliendo condena en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, así como en otros recintos destinados para prisiones preventivas, que se encuentran privados del ejercicio de algunos de sus derechos debido a que administrativa y formalmente no se encuentran incorporados al régimen de condena. Situación que ya fue tratada y expuesta en la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, sin que ellos haya significado una solución del problema.
2. El hecho de que ellos hayan sido ubicados por Gendarmería de Chile en recintos de detención preventiva para el cumplimiento de sus condenas, es una decisión de autoridad, fundada y razonable, pero que no puede conllevar vulneración de sus derechos.
3. A efectos de poner termino a las limitaciones a sus derechos que dicha destinación importa, resulta urgente que sean incorporados administrativamente al régimen de condena con el fin de que puedan acceder a todos los derechos de los que son titulares, en especial aquellos vinculados al cómputo de los tiempos

para acceder a los beneficios y derechos que le corresponden de conformidad al marco jurídico vigente, en particular los establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios contenido en el Decreto N° 518, el Decreto Ley N° 321, que Establece la Libertad Condicional Para Las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad y lo dispuesto en el Decreto N° 338, que reglamenta la libertad condicional, en especial lo relativo a los procesos de calificación de conducta por parte de un Tribunal de Conducta.

4. De acuerdo con la información recibida, el Director Regional de Gendarmería Señor Coronel Rivera habría señalado que sería imposible que quienes se encuentran cumpliendo condena en recintos de prisión preventiva puedan ejercer estos derechos, en especial a la solicitud del beneficio de la libertad condicional, específicamente por no poder elaborarse en esos recintos los informes psico sociales que requiere la normativa.

5. Estoy cierta de que usted comprende la gravedad de los efectos que una decisión administrativa limitativa como la no inclusión de esas personas condenadas el régimen jurídico de cumplimiento de condenas así como la no provisión de los servicios necesarios para que puedan hacer ejercicio de sus derechos.

6. Del mismo modo , no puede estar ajeno a su conocimiento que tales faltas afectan a centenares de personas, entre las cuáles se encuentran quienes cumplen condenas por hechos en el contexto de la revuelta social acaecida en Chile a partir de octubre del año 2019, de modo que dichas anomalías pueden además constituirse en futuras alegaciones o demandas contra el Estado en cortes internacionales de derechos humanos, y constituyen otra arista político-jurídica en este conflicto aún no resuelto por el Estado.

En razón de lo expuesto, solicito a usted , informar a la suscrita:

1. El número de personas que se encuentran cumpliendo condenas en recintos destinados a prisión preventiva a lo largo del país.
2. Los centros de prisión preventiva que , a pesar de incluir a personas condenadas, no se encuentran administrativamente incorporadas al régimen jurídico de cumplimiento de condenas.
3. Las medidas adoptadas por su cartera para poner término a esta irregularidad.
4. Los equipos destinados por usted a la elaboración extraordinaria de los informes psicosociales requeridos para el ejercicio de sus derechos, y las

fechas en las que se dio o se dará inicio a la elaboración de los mismos en cada uno de esos recintos, en particular en el CENTRO DETENCIÓN PREVENTIVA SANTIAGO 1.

III. III. OFICIO A DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE PERMANECEN RECLUIDAS EN DEPENDENCIAS CARCELARIAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA EN CAUSAS JUDICIALES ABIERTAS CON OCASIÓN DE DELITOS COMETIDOS DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL INICIADO EN EL PAÍS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Valparaíso, 3 de noviembre del 2021

De: XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Presidenta del Senado

A: Señor CHRISTIAN ALVEAL GUTIÉRREZ, Director Nacional de Gendarmería de Chile.

Ximena Rincón González, Presidenta del Senado a señor Christian Alveal Gutiérrez, **Director** Nacional de Gendarmería de Chile, señala:

Que, como es de público conocimiento, el senado de la Republica se encuentra tramitando el Proyecto de Ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala, Boletín N ° 13.941-17.

Dentro de la discusión de dicho proyecto de ley es de interés de la suscrita contar con información sobre las personas que permanecen recluidas en dependencias carcelarias en cumplimiento de una medida cautelar de prisión preventiva en causas judiciales abiertas con ocasión de delitos cometidos durante el estallido social iniciado en el país en el mes de octubre del 2019.

Entendiendo que dicha información tiene carácter dinámico le solicito remita, a la máxima brevedad, información actualizada a la fecha en la que emita su informe, incluyendo la individualización de las personas, nombre, Rut, sexo, edad, profesión u oficio, recinto penal en el que se encuentra recluido, rol de la causa,

delito por el cual se encuentra formalizado, fecha de la dictación de la medida, número de veces en las que se ha revisado la medida si le constare, y estado actual de la causa.

IV. MINUTA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEBASTIÁN PIÑERA

I. ACUSACIÓN

El artículo 52 señala en su numeral 2 que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados: “Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra: letra a) Del Presidente de la República, por *actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor* o la seguridad de la Nación, *o infringido abiertamente la Constitución o las leyes.*”

La acusación consta de 2 capítulos:

1. Capítulo I: Infracción abierta a la Constitución y las leyes.
2. Capítulo II: Afectación al honor de la República

CAPITULO I.

NORMAS CUYA INFRACCIÓN SE LE IMPUTA:

- a) El principio de probidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución
- b) El mandato del artículo 19 N° 8 de la Constitución que establece “el deber de tutelar la preservación de la naturaleza”.

Con relación al deber de probidad. El artículo 8° constitucional señala que “***el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones***”.

Este principio es desarrollado en su contenido principalmente por los artículos 52 y 53 de la ley N° 18.575 de Bases generales de la Administración del Estado.

De acuerdo al artículo 52: “***Las autoridades de la Administración del Estado[...] deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa***”.

“El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

“Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes”, entre ellas, evidentemente la responsabilidad política perseguible por esta vía.

Para mayor precisión y claridad, el artículo 53 define las exigencias que impone el interés general, señalando, entre otras, que: ***“Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público” ; “En lo razonable e imparcial de sus decisiones; “En la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones”, y “En la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales”.***

La cuestión a resolver reside entonces en establecer si el Presidente durante este mandato presidencial, en cumplimiento del deber que le asiste de “tutelar la preservación la naturaleza” actuó o no con probidad, es decir, si al respecto :

*Su conducta fue intachable

*Si dio preeminencia al interés general sobre el particular

*Si en resguardo de ese interés general:

- Sus decisiones han sido razonables e imparciales;
- Si dio recta ejecución a normas, planes y programas,
- Y si fue expedito en el cumplimiento de sus funciones.

Respecto de su deber de tutelar la preservación de la naturaleza en la zona cuya protección fue solicitada el 31 de julio del año 2010 por organizaciones ambientalistas universidades y sociedad civil.

Actos cuestionados:

1. No declaración de Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en una zona de 144.400 hectáreas marinas y 3.195 hectáreas de la zona costera terrestre, que van desde Punta Pájaros, al norte de Caleta Chañaral de Aceituno, en Atacama, hasta Punta Porotos, en el límite sur de la comuna La Higuera, en Coquimbo, solicitada a la administración ambiental en 2010, cuyo expediente se encuentra concluido desde 2018, y lleva 3 años a la espera de decisión por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad.

Lo que contraviene el deber del art. 19 N°8 CPR de “tutelar la preservación de la naturaleza”, y el deber de probidad regulado en el art. 8° CPR, que exige actuar ante todo dando preeminencia al interés general por sobre intereses particulares, y de modo expedito en resguardo de dicho interés general.

2. Gestión administrativa expedita de las solicitudes en favor los intereses privados de la Compañía Minera Dominga , por sobre el interés general de tutelar la protección de los ecosistemas , lo que constituye otra conducta infractora tanto del art. N°8 como del 19 N°8 constitucional, ya referidos.

Antecedentes: ACTOS DE SU PRIMERA ADMINISTRACIÓN:

Si bien la conducta del mandatario que aquí se evalúa es la correspondiente a este mandato presidencial, es muy relevante tener claro los antecedentes previos, pues sobre el tema ha habido un único comportamiento continuo.

1. Desde el 31 de julio del año 2010- hace 11 años- se encuentra ingresada en la administración del Estado una solicitud de Oceana y la Universidad Católica del Norte (UCN) para crear una Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en una zona de 144.400 hectáreas de zona marina que van desde Punta Pájaros, al norte de Caleta Chañaral de Aceituno, en Atacama, hasta Punta Porotos, en el límite sur de la comuna La Higuera, en Coquimbo, y 3.195 hectáreas de zona costera.
2. Dentro de dicho perímetro se encuentra la Bahía Totoralillo Norte de la comuna de La Higuera, lugar donde existen intereses privados para desarrollar el puerto del Proyecto Minero Dominga que pertenecía, junto a otros proyectos, a un fondo de inversión constituido en Chile, administrado por Minería Activa, en el que había más de 30 aportantes, uno de los cuales era el Presidente y su la familia.
3. En octubre 2010 , a 2 meses de ingresada la solicitud de protección, y sin que se halla realizado gestión alguna al respecto, los Piñera Morel y Carlos Délano acuerdan en Chile la compraventa de las acciones de Dominga. Un día después, la Compañía Minera ingresa una solicitud de concesión marítima en la subsecretaría de las FFAA.
4. Dos meses después, en diciembre de 2010, la familia del Presidente, a través de un serie de sociedades, una de ellas constituida en Islas Vírgenes Británicas, vendió su participación en el proyecto Minera Dominga al íntimo amigo del Presidente, Carlos Alberto Délano. Y pactaron que la última cuota del precio, equivalente a USD\$9.900.000 se pagaría a más tardar el 13 de diciembre de 2011, siempre y cuando, en la zona de emplazamiento del proyecto no se adoptaran una serie de medidas ambientales que lo afectaran irremediablemente.

5. De modo que esta operación de intereses particulares se pactó, siendo conocida públicamente la solicitud de Oceana y la UCN, con abierto compromiso del interés general, siendo Sebastián Piñera Presidente de la República, y no siendo creíble que éste no conocía los términos de dicho contrato.
6. Tras el escándalo mundial generado por los Pandora Papers, el Presidente volvió a recordarnos que “el mes de abril de 2009, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, se desligó totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares” y que “constituyó fideicomisos ciegos para la administración de todos sus activos financieros”.
7. Lo que no señala el Presidente ni su defensa, es que los contratos que él denomina “fideicomisos ciegos” no son tales, sino “mandatos de administración discrecional de cartera de inversiones sin información al mandante”, los cuales, a la fecha que los constituyó eran regulados de conformidad con la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y la Circular número 1.862 de la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero), que impone a los corredores de bolsa, el deber de entregar información al cliente.
8. Por ello, los contratos que celebró , **no eran ni podrían ser nunca ciegos, y dichas cláusulas no tienen valor legal, los corredores no sólo podían sino que debían entregarle la información.** Así lo advirtió el propio ex Superintendente de Valores y Seguros, señor Carlos Pavéz Tolosa, en su exposición dentro de la Comisión Especial Investigadora de las inversiones realizadas por Bancard en la empresa peruana EXALMAR, quien oficiando a los corredores ,recibió como respuesta en octubre del 2009, “ofició a los corredores mandatados por el Presidente, y que todos ellos respondieron con fecha 22 de octubre del año 2009 “que el cliente designaría en el futuro a una entidad o persona profesional independiente para revisar la información de las operaciones realizadas de conformidad con los mandatos”. De acuerdo al texto de la AC, a la fecha, aún no se informa a la autoridad competente el nombre de la entidad o profesional independiente designado al efecto.
9. En cualquier caso, aún cuando consideráramos creíble que el Presidente no estaba al tanto de estas operaciones, y que la cláusula no comprometía una determinada conducta de su parte como Jefe de Gobierno, es evidente que esta primera administración de Piñera no fue expedita en su función de tutelar la preservación de la naturaleza en el polígono solicitado. Esta falta de gestión

expedita y eficiente del interés general implicado en tramitar y resolver la solicitud de protección de una zona marítima y de borde costera de gran valor ecológico y social, constituye en sí una falta a la probidad -diferente a la que se constituiría por existir conflicto de intereses_ y significa además un incumplimiento de su deber de tutelar la preservación del ecosistema.

10. En cambio, la administración Piñera sí fue expedita en gestionar los intereses privados de la Minera Dominga, con lo cual antepuso el interés privado por sobre el interés público, faltando con ello a la probidad. Así queda en evidencia en una escala de tiempo:

- Dic 2010, al día siguiente del pacto de venta de Dominga, la Minera ingresa ante la Subsecretaría de las FFA la solicitud de concesión marítima para el puerto que requería;
- Dos meses después (feb. 2011), la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), emitió informe favorable a la concesión con el voto a favor del Intendente Regional y Seremi de Medio Ambiente, mismo que debía tramitar la declaración de Área Marina Costera Protegida.
- Al mes siguiente, marzo 2011, la Subsecretaría de Defensa otorgó la concesión, sólo 7 días después de cumplido el plazo puesto para proceder al tercer pago.
- En febrero del 2011, Dominga, a través de Andes Iron Limitada, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que se le autorizara a hacer sondeos y estudiar el mineral, que fue aprobada en julio del mismo año, para realizar cerca de 300 sondeos en el sector donde se planea instalar la faena minera. Todo ello, dentro del periodo cubierto por la cláusula del contrato firmado en Islas Vírgenes Británicas, y mientras la solicitud de Oceana y la UCN ni siquiera conseguía una fecha tentativa para llegar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, paso crucial para la aprobación de una zona protegida. De hecho, hasta hoy, diez años después, no ha logrado escalar hasta esa fase.

En contraste, cuando finalmente, Minera Dominga ingresa como proyecto definitivo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo (COEVA), decidió calificar desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), siendo rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la IV Región de Coquimbo, el día 14 de marzo de 2017. Esta resolución desfavorable fue reclamada por los titulares del proyecto minero, ante el Comité de Ministros y el día 13 de octubre de 2017, aún durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, el Comité **decidió mantener la calificación ambiental desfavorable del proyecto**.

11. Lo relevante de esos hechos de la 1ª. administración Piñera , es que evidencian el uso que hace se su poder político para anteponer los intereses privados por sobre el interés general en orden a cumplir con su deber constitucional de “tutelar la preservación de la naturaleza”.

Defensa del Presidente: En relación a esos hecho , surge el primer argumento de la defensa : la AC no puede revisar hechos acaecidos durante su primera administración, alegando una supuesta “Prescripción de los hechos en juicio político”.

Refutación de la Defensa: Lo cierto es que los hechos reseñados, están incardinados por una serie de actos y omisiones desde el año 2010 hasta el 2021. Y la presente acusación no lo imputa por hechos realizados en su primera administración, sino los realizados en esta administración que están concatenados , para su pesar , con conductas anteriores.

En todo caso, se debe aclarar, que no existe norma alguna que disponga un plazo de prescripción de la responsabilidad constitucional, y que lo que nuestra Carta Fundamental consagra en su artículo 52 N°2, letra a) es un plazo de preclusión , es decir, un plazo procesal, para formular la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, la que sólo podrá interponerse mientras el mandatario esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Pero no un plazo sustantivo que elimine la responsabilidades políticas, las que no prescribe, máxime si el mismo Presidente se repostula, y obtenido la primera magistratura ,usa su poder político para sostener un conducta infractora de la constitución.

En suma, el Presidente de la República, hoy es pasible en procedimiento de acusación en juicio político por hechos acaecidos en su primer mandato por no haber limitación temporal para la efectivización de la responsabilidad constitucional.

Segundo argumento de la Defensa: El sobreseimiento del “Caso Exalmar” y la cosa juzgada. La defensa señala que la acusación vulnera el principio de la cosa juzgada por existir una sentencia de sobreseimiento en juicio iniciado por los mismo hechos , siendo que el contrato de Dominga sería un hecho conocido en 2017 al momento de hacerse la investigación penal.

Refutación de la Defensa: La sentencia penal no tienen relevancia para los efectos del juicio político , pues la cosa juzgada se refiere solamente a lo juzgado en sede penal por texto legal expreso del art. 1 del Código Procesal Penal. No entre

juzgamiento penal y juzgamiento político, pues las responsabilidades que se juzgan en un uno y otro ámbito son distintas.

En la sesión del 02 de noviembre, de la comisión revisora, el profesor Javier Wilenmann, Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Bonn, expresó que argumento del sobreseimiento y la prescripción tienen un efecto importante en materia penal y muy probablemente si esto fuera conocido por un tribunal penal, este tendría que sobreseer por prescripción y sobreseimiento, pero en materia constitucional es distinto .Pues se trata de la juzgar la corrección habida en el ejercicio del poder político en la primera magistratura del Estado , si se ejerció al servicio de la nación, y no de intereses privados, y no si existen delitos.

Incluso si obviáramos la impropiedad de confundir preclusión procesal con prescripción de responsabilidades y la de alegar cosa juzgada en procesos de distinta naturaleza y fines distintos ,los hechos del primer mandato importan en tanto contexto para comprender los actos que realiza durante este segundo mandato, y para dilucidar la forma en cómo el Pdte. Piñera ejerce el poder político que le confiere la primera Magistratura de la nación: ¿a favor del interés general o de intereses particulares?, ¿de modo razonable? , ¿de modo expedito? en orden a satisfacer el interés general que hay en la preservación de la naturaleza o no ? . Pues eso es lo que exige el deber de probidad.

ACTOS CUESTIONADOS DE SU SEGUNDA ADMINISTRACIÓN

A)En cuanto al proceso administrativo para declarar zona protegida a La Higuera,

A finales del gobierno de Michelle Bachelet , el Comité de Ministros para la sustentabilidad aprobó la declaración del sector de La Higuera, lugar donde se emplaza el proyecto minero, como Zona Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 5/ 2018 de este organismo. Se mandató al Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con el de Economía, la precisión del área a proteger. Según el acta de la cita, en esa ocasión no hubo acuerdo sobre la extensión de la superficie del área que sería protegida.

En esta segunda administración del Presidente Piñera, aunque el principio de continuidad de la administración del Estado lo obligaba a actuar, nada se hizo. Omisión que infringe el deber de tutela de la naturaleza. Porque lo derechos fundamentales y los deberes de respeto que estos conllevan , también se infringen por omisión.

El 5 de octubre del presente, casi 4 años después del mandato contenido en el Acta del Consejo antes referida , y sólo una vez conocida por la opinión pública la cláusula de pago de la venta de acciones de Dominga, el Ministerio de Medio Ambiente informa que vuelve a cero la tramitación y se ingresaría una nueva propuesta, dilatando nuevamente su concreción. Sin embargo, una promesa, no constituye cumplimiento de su deber de tutelar la preservación de la naturaleza, ni del deber de hacerlo de modo expedito ,que es lo que exige el interés público.

La Defensa del Presidente Piñera señala que la que “la constitución sólo castiga acciones y no omisiones”. Sin embargo la letra a) del N ° 2 del artículo 52 señala que procede AC en su contra : “por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación”, o por haber “infringido abiertamente la Constitución o las leyes.” Y es obvio que la Constitución y la leyes se infringen por acción u omisión.

Refutación: En este caso, tanto el deber probidad del artículo 8°, como el deber de tutelar la preservación de la naturaleza del artículo 19 N° 8, se infringen tanto por acción como por omisión.

Por omisión, por no hacer primar el interés general por sobre los intereses particulares , y por lo mismo , por no desarrollar tampoco en esta administración, una gestión expedita del interés general involucrado en la declaración protección del ecosistema en cuestión. Ambas, exigencias básicas del deber de probidad según los artículos 52 y 53 de la ley de LOCBGAE. Al mismo tiempo es un actuar improbo por acción , al dar preeminencia a los intereses de la Minera Dominga, gestionando los informes y autorizaciones requeridas para que desarrolle sus inversiones, a sabiendas que existe una solicitud de protección del área paralizada.

B) En cuanto a la aprobación del Proyecto Minero Dominga

En octubre 2017, el Comité de Ministros rechazó el cuestionado proyecto principalmente por "no hacerse cargo de manera adecuada de los eventuales impactos significativos al medioambiente y la salud de las personas; en particular en temas como calidad de aire, contaminación lumínica, ruido, riesgo de accidentes y derrames en la operación portuaria"; y por "el impacto que podría generar en la flora y fauna de una zona ecológica única en el mundo, donde -entre otras cosas- habitan el 80 por ciento de la población mundial del Pingüino de Humboldt y otras especies emblemáticas, como ballenas y chungungos".

Esta decisión del Comité de Ministros fue impugnada ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta por vicios de forma en la decisión (*el 01 de diciembre de 2017*) y, el Primer Tribunal Ambiental, (*con fecha 27 de abril de 2018*) dictó sentencia, resolviendo a favor del Reclamante, anulando las resoluciones negativas de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y del Director Ejecutivo del SEA, ordenando retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental.

Durante el actual gobierno de Sebastián Piñera:

a) Frente a esta sentencia, diversas organizaciones y comunidades presentaron sendos recursos de casación en la forma y el fondo para ante la Excm. Corte Suprema. Sin embargo, no hizo lo mismo el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA no recurre en defensa de los actos administrativos impugnados haciendo valer la legalidad del actuar de la administración, cuestión que es sumamente excepcional puesto que por regla generalísima el Estado y, en particular, el Servicio de Evaluación Ambiental, si defiende lo que hace.

b) Cabe señalar que el Servicio de Evaluación Ambiental es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente (*art. 80 Ley 19.300*) y su Jefe de Servicio, y representante legal, es designado de forma directa por el Presidente y, por ende, es de su exclusiva confianza.

c) Conforme con el artículo 80 de la Ley N°19.300, el SEA está afecto a la Ley 19.882 que crea el Sistema de Alta Dirección Pública, por lo que el Director Ejecutivo del SEA, debió haber sido nombrado siguiendo el procedimiento de concurso que establece dicha normativa. Sin embargo, el Presidente de la República utilizando la regla excepcional establecida en el artículo 36 bis eximió la aplicación del mecanismo concursal contemplado en la ley para el Director Ejecutivo del SEA y, procedió, mediante decreto supremo a nombrarlo de forma directa el 14 de marzo de 2018.

f) **Estando aún pendiente de resolución los recursos de casación en la forma y el fondo en contra de la sentencia del 16 de abril de 2021 del Primer Tribunal Ambiental, la Comisión Ambiental (COEVA) de Coquimbo, presidida por el delegado presidencial de la Región de Coquimbo sesionó de forma extraordinaria el 23 de agosto de 2021 y calificó favorablemente el proyecto por medio de la Resolución Exenta N° 161 de 24 de agosto de 2021, con el voto favorable de todos los integrantes de la COEVA, salvo el voto en contra del Delegado Presidencial de la Región de Coquimbo.**

Este hecho, es sumamente excepcional, puesto que lo normal, además de natural y obvio, es que un proyecto de esta envergadura y así de polémico hubiera aguardado a la resolución de la Corte Suprema sobre los recursos de casación, para así evitar la posible revocación de la resolución de calificación ambiental ante un eventual fallo favorable de la Corte Suprema.

g) En el mes de septiembre de 2021, el Presidente le pidió la renuncia al recién nombrado Delegado Presidencial de la Región de Coquimbo, único miembro de la COEVA que votó en contra de calificar favorablemente el proyecto.

De este modo, se vuelve a desarrollar “muy diligentemente” una actividad administrativa en favor de intereses particulares, mientras en cambio sigue paralizada la protección medioambiental de la Higuera. Según los artículos 52 y 53 de la ley de LOCBGAE , es un actuar improbo, y por acción , dar preeminencia a los intereses de la Minera Dominga, gestionando los informes y autorizaciones requeridas para que desarrolle sus inversiones, a sabiendas que existe una solicitud de protección del área paralizada , y no importando que el “interés general en la protección de la naturaleza v/s el proyecto aprobado”, se encuentra además pendiente de resolución judicial en el máximo tribunal de justicia del país.

Los antecedentes anteriores son suficientes para aprobar la imputación que se hace en el capítulo I por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes: En particular : A) El deber de probidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución y que según los artículos 52 y 53 de la LOCBAE le obliga a: tener una conducta intachable y dar preeminencia al interés general sobre el particular , y en resguardo de ese interés general, le obliga a -Tomar decisiones razonables e imparciales - Dar recta ejecución a normas, planes y programas -Y a ser expedito en el cumplimiento de sus funciones. Y , B) El mandato del artículo 19 N°8 de la Constitución que establece “el deber de tutelar la preservación de la naturaleza”.

Capítulo II: Afectación al honor de la República

Acto principal que se le imputa: Interrupción del liderazgo medioambiental desarrollado desde el año 2012 por el Estado de Chile en América Latina y el Caribe , que se inicia en su propio primer mandato, al no suscribir el Tratado de Escazú. La AC plantea que ello importa tanto una compromiso grave del honor de la nación como otra infracción a los deberes de tutelar la preservación de los ecosistemas.

El 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe hizo historia al adoptar, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, instrumento jurídico que no sólo es pionero en materia de protección ambiental, sino también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto” .

En particular, su artículo 7° reconoce el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, incluidos procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, o que afecten el derecho a la salud..”. Por tanto, de haberlo suscrito al inicio de su segundo mandato, habría echado por tierra todos los esfuerzos hechos en su primer mandato a favor de los intereses de la Minera, y habría tenido que enfrentar la oposición de comunidades científicas, sociedad civil y organizaciones ambientalistas en el proceso de calificación ambiental del proyecto Dominga.

La Defensa del Presidente Piñera señala que la suscripción de un tratado es una potestad política discrecional del P. de la R. , no una obligación, y en consecuencia no puede ser cuestionado por no firmar Escazú.

Refutación: Lo cierto es que al Presidente no se le acusa por no firmar el tratado de Escazú porque estimarse que es obligatorio para un P. de la R. suscribir tratados , sino que se le reprocha no hacerlo porque ello importa infringir su deber de tutelar la preservación de la naturaleza (por 19 N ° 8 CPR) , en circunstancias que es el primer gran pacto medioambiental de América Latina y el Caribe y pionero en la región que busca garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la Justicia en asuntos ambientales.

Y, además , se le reprocha el daño grave al honor de la República que significó negarse a suscribir dicho tratado, en el contexto en el que lo hizo: Escazú fue impulsado desde el año 2012 por Costa Rica y Chile, precisamente en el primer período del mismo mandatario. Chile asumió la secretaría técnica de las

negociaciones, fue negociador en las 9 sesiones de redacción, y estuvo de acuerdo con el texto final, en marzo de 2018.

En septiembre del 2020, sin embargo, a poco de cerrar el período para la firma del tratado , el Gobierno chileno de Sebastián Piñera anunció que no lo firmaría, dejando a Costa Rica sola en la presidencia de Escazú.

Dicha resolución dejó a Chile ante el concierto internacional, como un Estado no fiable, pues el gobierno expuso precisamente el acuerdo de Escazú como argumento para conseguir la sede de la COP25, y luego , presidiendo dicha Conferencia aparece argumentando -entre otras cosas-que dicho tratado *“introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas que dificultan su cumplimiento y exponen a Chile a controversias internacionales; y que el hecho de que se dé un reconocimiento y tutela a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales traería implicancias constitucionales pues generaría desigualdad ante la ley frente a otras agrupaciones de derechos humanos”*, ante la mirada atónita de los demás Estados, líderes activistas y organizaciones medioambientales de todo el mundo.

El grave hecho de interrumpir el liderazgo verde y de protección de los derechos sociales de las poblaciones más vulnerables, que por mas de una década nuestra nación ha venido construyendo, a la vez que se estaba siendo el anfitrión, manteniendo la presidencia y el liderazgo de las negociaciones de la COP25 en Madrid, la cumbre ambiental mas importante del planeta y que tiene como *lei motiv* *“el cambio de paradigma del crecimiento económico infinito en un mundo finito”*, es razón suficiente para aprobar el capítulo II, por:

* Comprometer gravemente el honor de la nación

Y además, infringir abiertamente la Constitución y las leyes: En particular : A) El deber de probidad (artículo 8° CPR) ; de tener una “conducta intachable” ; “dar preeminencia al interés general sobre los particulares” , y en resguardo de ese interés general , “tomar decisiones razonables e imparciales” , y “dar recta ejecución a normas, planes y programas” (artículos 52 y 53 de la LOCBAE) .Y B) el mandato del artículo 19 N°8 de la Constitución que establece “el deber de tutelar la preservación de la naturaleza”.

V. MINUTA PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA FORMA DE PROVISION DE VACANTES DE CONVENCIONALES CONSTITUYENTES PERTENECIENTES A LISTAS CONFORMADAS SOLO POR INDEPENDIENTES y ESTABLECE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONVENCIONAL EN CASOS GRAVES.

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, acerca del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, sobre renuncia y reemplazo de convencionales constituyente, refundió los BOLETINES N^{OS} 14.589-07 y 14.592-07, moción de los Honorables Senadores señora Rincón y señores Bianchi, Huenchumilla, Montes y Sandoval, el primero, y en Moción de los Honorables Senadores señores Elizalde, Insulza y Letelier, el segundo.

ACUERDOS: aprobado en general por mayoría (3x2), el texto de Senadora Rincón y senador Huenchumilla.

“ARTICULO ÚNICO. Introdúzcase la siguiente modificación en el artículo 134 de la Constitución Política de la República:

“Agregase en el inciso primero, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, el texto siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60, los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. En caso de producirse una vacante en los cargos de convencionales constituyentes que participaron en listas electorales conformadas sólo por independientes, la provisión referida en el artículo 51 se hará con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidatos del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo. Si hubiere candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio del sorteo a que se refiere al inciso final del artículo 121 del DFL N° 2 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.”

QUÓRUM ESPECIAL: El artículo único del proyecto de ley, requiere para su aprobación del voto conforme de las dos terceras partes de los senadores en ejercicio, por cuanto se modifica el Capítulo XV de la Carta Fundamental.

URGENCIA: No tiene.

FUNDAMENTOS.

En el proceso electoral de los integrantes del órgano constituyente, el Congreso Nacional garantizó su conformación paritaria, con escaños reservados para representantes de Pueblos Originarios y con la oportunidad de que ciudadanos y ciudadanas independientes, es decir, no afiliados a partidos políticos, pudieran constituir listas de independientes para acceder a integrar la Convención. De hecho atendida la demanda ciudadana por contar con representantes en la Convención Constitucional que no pertenecieran a partidos políticos, se hizo posible que candidatos independientes participaran en el proceso electoral no sólo en listas conjuntas con partidos políticos, sino también en listas conformadas sólo por independientes

No obstante, en el último devenir del órgano constituyente se ha evidenciado que el Congreso Nacional no reparó en la necesidad de establecer una regla especial para la provisión de vacantes que pudiesen producirse con ocasión de la cesación del cargo o la eventual renuncia de convencionales independientes que formaron listas exclusivas de independientes, toda vez que dichas listas fueron un mecanismo instrumental concebido para ser utilizado sólo en este proceso electoral, de tal modo que no existían reglas previas que pudiesen ser aplicadas en vacancias producidas en su caso en particular. Existe por lo tanto, un vacío de texto constitucional que es necesario reparar.

Llenar ese vacío, no es un tema complejo, pues existen normas constitucionales generales que sin duda deben ser atendidas para construir una propuesta específica para este caso. Son 4 las normas constitucionales vigentes aplicables al caso que nos ocupa:

1) El inciso 5° de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMO NOVENA, con relación al artículo 51, inciso 4°, que mantiene el cupo dentro del núcleo originario desde donde proviene el convencional que deja la vacante: en este caso, dentro de la lista de independientes al que el independiente que deja la vacante pertenecía.

2) El inciso 6° de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMO NOVENA que circunscribe los posibles reemplazantes a los candidatos de esa lista que declararon sus candidaturas en el mismo distrito que el convencional que deja el cargo.

3) La DISPOSICIÓN TRANSITORIA TRIGÉSIMA PRIMERA sobre el equilibrio entre mujeres y hombres en la elección de Convencionales Constituyentes , que regula “la distribución y asignación de escaños de los Convencionales Constituyentes” de conformidad con las reglas generales establecidas en el artículo 121 de la ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, pero modificada con el fin de garantizar el principio de representación equitativa de hombres y mujeres.

4) EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY N° 18.700 , norma general que contiene los criterios y principios generales para la determinación de los candidatos que deben ser designados en los escaños, y establece como principio general que deben resultar designados en ellos, los ciudadanos que obtengan las primeras mayorías dentro de sus listas.

Estas reglas y principios generales vigentes para la conformación de la Convención Constitucional, y para los procesos electorarios en general, deben ser aplicadas y respetadas en el establecimiento de una solución a la falta de esta regla específica de reemplazo. Su cumplimiento irrestricto representa el respeto imprescindible que ha de tenerse por la integridad de la voluntad ciudadana manifestada en los procesos electorales, y más aún, en este trascendental proceso electionario del órgano constituyente, que fue dotado de relevantes reglas especiales para su conformación.

Argumentar en contra de la aplicación de la provisión de las vacancias establecida en el artículo 51 para este caso, no sólo es contrario al texto expreso de la Constitución que hace aplicable tal norma a los convencionales constituyentes en el inciso primero del artículo 134 de la Constitución Política de la República, sino que además equivaldría a aceptar que el Congreso Nacional reguló este proceso electionario con una severa discriminación arbitraria en favor de los partidos políticos y desmedro de los independientes.

Por otro lado, las normas establecidas en el artículo 154 sobre estatuto personal de los convencionales no se ponen en el caso de ser necesario la renuncia de un convencional constituyentes por razones diferentes a la enfermedad grave. Sin embargo, los hechos han demostrado que tratándose de éste órgano y su función constituyente y refundacional, es imprescindible resguardar que en ella se cumpla los más alto estándares de legitimidad , en razón de lo cual es aconsejable que de

existir otros hechos graves que aconsejen la renuncia de alguno de sus representantes, ésta sea posible, máxime si el trabajo del órgano constituyente debe ser sometido a la aprobación de la ciudadanía en un plebiscito de salida. A cuyo efecto es menester mantener equivalentes las exigencias de gravedad y la necesidad de calificación de dicha gravedad por parte de un órgano técnico e imparcial, como resulta ser el Tribunal Calificador de Elecciones.

OBJETIVOS.

El presente Proyecto de Reforma Constitucional tiene dos objetivos:

1. Proponer una regla específica de provisión de la vacante de un ciudadano electo dentro de una lista de independientes conformada exclusivamente por candidatos de ese tipo, a partir de las norma y principios generales vigentes en la materia, pero que, tratándose de normas de derecho público, requieren de una consagración expresa para este caso en particular
2. Ampliar la causal de renuncia tratándose de convencionales constituyentes a otros casos en los que hechos graves afecten severamente su desempeño del cargo o pongan en riesgo la legitimidad de la labor de la Convención Constitucional, calificados por el Tribunal Calificador de Elecciones.

Y para ello se proponen CUATRO reglas :

1. Los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo la el funcionamiento de la Convención Constitucional. Ejemplo brote de COVID.
2. Y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. Se opta por el órgano técnico al que la ley orgánica de votaciones y escrutinios establece, y no por el Tribunal Constitucional que ha sido cuestionado por la ciudadanía por su composición más política que técnica.
3. En caso de producirse una vacante en los cargos de convencionales constituyentes que participaron en listas electorales conformadas sólo por independientes, la provisión referida en el artículo 51 se hará con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral.

4. De no existir candidatos del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo. Si hubiere candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio del sorteo a que se refiere al inciso final del artículo 121 del DFL N ° 2 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.”

Como se ve, se aplican las reglas generales que ya existen en nuestro sistema electoral, pero que a falta de consagración expresa , es necesario regular expresamente, pues en derecho publico sólo se puede hacer lo que esta expresamente establecido y no se pueden aplicar reglas por analogía.

VI. INFORME RESULTADOS DE TRAMITACIÓN PROYECTO DE LEY QUE REGULA EN IGUALDAD DE CONDICIONES, EL MATRIMONIO DE PAREJAS DEL MISMO SEXO. BOLETIN N ° 11.422-07.

1. PUNTOS SUSTANCIALES Y CONTROVERTIDOS

a) Sistema de géneros en el matrimonio

La cuestión esencial es ¿cuál sería la razón que justificaría seguir manteniendo como requisito excluyente para celebrar un contrato de matrimonio civil que las personas que deciden unirse, deban ser de género binario?

Junto con el nacimiento de los Estados modernos surge el concepto de persona, como tenedora de derechos individuales que el Estado reconoce y protege precisamente para evitar que el poder político o cualquier otro tipo de poder cultural, religioso, económico, fáctico, lo someta a sus designios. El heteropatriarcado², sistema de creencias extendido por el cristianismo, incluye el postulado de familia patriarcal, monogámica y heterosexual sobre la base de su concepto de que los géneros humanos son binarios, es decir, son sólo dos y no

² Sistema de relaciones sociales caracterizado por la supremacía de lo masculino y la heterosexualidad, lo que genera mecanismos de discriminación por razón de sexo y orientación sexual hacia mujeres y personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales). El patriarcado en sí es heterosexual. Hablar de heteropatriarcado es enfatizar una de sus características fundamentales, en un momento en el que la diversidad sexual está siendo cuestionada y atacada [con llamamientos como el del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, [contra 'el imperio gay y el feminismo'](#)"]

confundibles, son complementarios, pero la mujer subordinada al varón. De ahí que no conciban, y se opongan, a cualquier idea de diversidad de géneros.

El heteropatriarcado postula también que existe un correlato indivisible entre género, sexo biológico, identidad de género y rol de género, es decir que, quien es biológicamente un hombre, pertenece al género masculino, debe sentirse hombre, parecer y actuar del modo que la misma cultura patriarcal dominante ha definido culturalmente como “masculino”, y sólo debe desarrollar relaciones afectivo-sexuales con personas del género femenino. Y viceversa. De ahí que en ese ideario no se conciban parejas ni familias no binarias.

Sin embargo, como el Estado moderno es laico, y el fundamento ético del Derecho se halla en la igual dignidad y libertad de los seres humanos, las instituciones jurídicas han de concebirse desprendidas de exclusiones culturales, más cuando éstas oprimen, estigmatizan y marginalizan formas de ser, sólo por no ajustarse a tales concepciones

b) La procreación en el matrimonio.

Dentro del estatuto contractual del matrimonio, la procreación no es un requisito ni de existencia ni de validez. No es un requisito esencial, sino uno de sus fines. Para que una familia sea jurídicamente protegida mediante el estatuto matrimonial, no requiere tener hijos. De lo contrario, el matrimonio de quienes no quieran tener hijos no podría celebrarse, tampoco el matrimonio en artículo de muerte y deberían prohibirse los matrimonios de personas adultas mayores, de mujeres u hombres infértiles. En el 2° trámite se presentó una indicación para suprimir la procreación como fin del matrimonio, que fue rechazada.

Donde sí resulta esencial la procreación, es dentro del concepto tradicional-patriarcal de la familia, pues ella es la que permite definir y circunscribir los roles y funciones sociales de las mujeres: funciones de reproductora y educadora de la prole. De modo que la procreación es base y exigencia del heteropatriarcado, pero no del matrimonio civil. Desprovisto de estereotipos de género, el matrimonio no obliga ni a hombres ni a mujeres a reproducirse.

c) La Filiación.

Las familias homoparentales y lesbomaternales son aquellas conformadas por dos personas de un mismo sexo, que pueden estar unidas por unión civil o por matrimonio. Sus hijos o hijas pueden encontrar la fuente de su filiación en la

adopción, en técnicas de reproducción asistida o en el origen genético respecto de uno de los padres o madres, por ejemplo, en el caso de una familia ensamblada³. Sin embargo, estas familias carecen de reconocimiento legal en Chile y se encuentran en una situación de desigualdad de derechos y de desprotección.

La legislación chilena no permite que ambos padres o ambas madres tengan un vínculo jurídico de filiación con sus hijos/as. Sólo uno de los padres o una de las madres -el que tenga vínculo genético- tiene un vínculo legal con ellos/as. Ni siquiera respecto de hijos sin filiación determinada, la ley permite el reconocimiento voluntario por parte de la madre o padre que comparte la crianza del hijo/a. En caso de hijos nacido mediante técnicas de reproducción asistida, la ley tampoco reconoce filiación entre los miembros de la pareja homoparental o lesbomaternal que se someten a ella, y los hijos nacidos de dicho modo. Asimismo, carecen de acceso a ser padres o madres adoptiva. La Ley AUC no modificó la Ley de Adopción.

Para los detractores del PL, no existe ninguna necesidad de establecer vías de reconocimiento de la filiación en familias no binarias, tema que estaría solucionado a través de la preferencia del cuidado personal que la ley de AUC entrega a la persona que ha participado activamente en la crianza de un niño o una niña. Ello, sin embargo, implica confundir cuidado personal con filiación, siendo que el primero no confiere al cuidador el estado civil de padre o madre del niño, con todo lo que ello implica.

2. CONTENIDOS PROYECTO APROBADOS EN PRIMER TRÁMITE:

En materia de matrimonio:

Modifica el art.102 del CC concibiendo al matrimonio como un contrato entre “dos personas”, sin aludir a su género, no importando si ellas adscriben a un sistema binario o no binario de género.

Reemplaza términos asociados al patriarcado y al binarismo de género, como “marido y mujer” por las expresiones neutras “cónyuges”.

Elimina la homosexualidad como causal de divorcio culpable.

³ La familia ensamblada o reconstituida se caracteriza porque uno o ambos miembros de la pareja tienen uno o varios hijos de una relación anterior. Este tipo de familia es cada vez más frecuente en nuestra sociedad y se originan luego de un divorcio o del fallecimiento de uno de los cónyuges.

Permite el reconocimiento de matrimonios celebrados en el extranjero entre personas del mismo sexo

Reconoce el derecho a solicitar alimentos, cargas familiares y pensiones de invalidez y sobrevivencia.

En materia patrimonial:

Permite pactar un régimen de participación en los gananciales o de separación de bienes. Excluyéndolos del régimen de sociedad conyugal, bajo el argumento que éste se configura bajo estereotipos de género. *(Sin embargo, para algunos profesores de derecho civil, ello pudo permitirse en base a un acuerdo de la pareja respecto de quien ejercería el rol masculino y femenino respecto del patrimonio).*

En materia de filiación:

Cambia el concepto de padres y madres por el de “progenitores”, incluyendo la homoparentalidad.(art.34 PL)

Se eliminan los conceptos hermanos maternos y paternos, cambiándolos por hermanos de “doble conjunción”, si lo son por parte de ambos progenitores, o “de simple conjunción”, si los sólo por uno de ellos.

▪ Con relación a las fuentes de filiación:

a) Respecto de hijos biológicos sin filiación determinada en una familia ensamblada, es decir, en la que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijos de una relación anterior, se permite a la pareja del padre o de la madre adquirir el vínculo por medio del acto de reconocimiento.

b) Respecto de hijos procreados por medio de técnicas de reproducción asistida⁴, se reconoce la filiación a parejas de mujeres lesbianas que se someten a ellas, a partir del hecho del parto de una y la voluntad procreacional de la otra manifestada en acto de reconocimiento. Esta norma mantendría la regla general de filiación materna de los hijos, determinada por el hecho del parto y amplía la vía del “reconocimiento” permitiéndolo a la otra mujer.

⁴ Estimulación Ovárica (EO) - Inseminación Artificial - Fertilización in vitro con transferencia de embriones - Transferencia intratubárica de gametos (TIG) - Inyección Introcitoplasmática de espermatozoides (ICSI)

De hecho igual norma se encuentra recogida en el Proyecto de Ley sobre filiación de hijos de parejas del mismo sexo BOLETÍN N °10.626-07 que se encuentra en Sala para aprobarse en primer trámite.

- c) Respecto de hijos adoptivos, el PL **no modifica** la Ley de Adopción. Ello, en el entendido que el PL de Reforma del Sistema de Adopción “así lo permitirá”.

El Proyecto de Ley sobre filiación de hijos de parejas del mismo sexo BOLETÍN N °10.626-07 que se encuentra en Sala para aprobarse en primer trámite, sin embargo, sí modifica el art el artículo 21 de dicha ley , permitiendo a “Cónyuges, convivientes civiles, personas solteras, divorciadas o viudas, podrán optar a la adopción en igualdad de condiciones”

3. MODIFICACIONES EN EL SEGUNDO TRÁMITE.

¿

En cuanto a los derechos de las parejas: Se agrega el reconocimiento de los derecho a descanso de pre y post-natal y el fuero respectivo, al progenitor no gestante en el contexto de las técnicas de reproducción humana asistida. (Arts. 195.197 bis, y 201)

En materia patrimonial: Se elimina la causal de termino del régimen participación en los gananciales por disolución del matrimonio por *rectificación de sexo y nombre por razón de identidad de género*”. (Art. 1792-27)

En materia de parentalidad

- En favor del interés superior del niño, se permite que la determinación de filiación pude hacerse respecto de más de dos personas.
- Se explicita el derecho a no discriminación no sólo por orientación sexual sino también por identidad de género, entre otras categorías, para efectos de filiación y custodia de hijos o hijas, estén o no las parejas unidas en matrimonio y hubiesen tenido o no a sus hijos/as mediante fertilización humana asistida.
- Se deroga el impedimento de rectificar la partida de nacimiento a las personas trans casadas
- Se establece el deber de consignar la maternidad de mujeres trans y la paternidad de hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijos/as.

- En la determinación del orden de los apellidos de las parejas del mismo sexo, a falta de acuerdo entre los progenitores, el Registro Civil lo someterá a sorteo. No se entenderá que el apellido del padre anteceda al de la madre, como se aprobó en el Senado.
- Respecto de los hijos procreados por medio de técnicas de reproducción asistida, se amplía el reconocimiento de la filiación de los hijos que nacen por esta vía a las 2 personas que se someten a ellas-mujeres u hombres-. (*Artículo 182*).

Ello implica aceptar tácitamente la posibilidad de gestar en vientre subrogante, altera la regla general de filiación materna por el hecho del parto, y requiere una regulación especial de la filiación de los niños y niñas gestados por una tercera persona. Un primer paso en la determinación de su filiación, es esta regla. También se propuso eliminar la regla de que todo parto determina la filiación materna.(Indicación rechazada)

Lo que si ha de quedar claro es que esta regla, no autoriza la maternidad subrogada en Chile, pues sigue siendo un pacto con objeto ilícito. Lo que sí hace es garantizar que todo hijo nacido de ese modo, tenga por progenitores a las 2 personas que decidieron y planificaron gestarlo así ; y no una tercera cuya voluntad es sólo “ayudarlos a gestar” u “obtener un beneficio económico”.

Ello no es menor, pues aunque la maternidad subrogada no sea un pacto lícito en Chile, nacen niños de chilenos por esa vía, y no pocas terceras subrogantes se niegan a entregarlos una vez paridos, afectando el derecho a la identidad de los niños.

En todo caso, para hacerse cargo de ello, desde septiembre del año 2018 existe en la Comisión de Constitución para su discusión general un PL que precisamente “Modifica el Código Civil para determinar la identidad de niños y niñas nacidos en gestación subrogada”, de autoría de la Senadora Ximena Rincón. (Boletín N° 12.106-07)

Finalmente, en materia de Norma Transitorias, se disminuye el plazo de entrada en vigencia de trece meses después de su publicación en el Diario Oficial, a noventa días.

4. RESULTADOS EN TERCER TRÁMITE

Comisión de Constitución rechaza las siguientes modificaciones realizadas a:

Código Civil:

Artículo 37. Las personas pueden tener filiación con más de dos personas.

Artículo 182 Reconoce filiación a personas respecto de hijos nacidos mediante TRHA-

Artículo 225-2 Regla de no discriminación para cuidado personal.

Artículo 1790-27

Artículo 42 N° 5 drogadicción y alcoholismo como causal de divorcio por culpa.

Modificaciones al Código del Trabajo.

Artículo 195 y 197 bis .Permisos de maternidad y fuero.

Todas las modificaciones a la ley de Identidad de género

Se cita a Comisión mixta para Lunes 6 de Diciembre del 2021 hasta total despacho.

VII. REQUERIMIENTO A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE SOLICITA PRONUNCIAMIENTO SOBRE EVENTUAL AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO PUBLICO EN EL CASO DE SOLICITARSE PERMISO SIN GOCE DE SUELDO CON EL FIN DE ASUMIR ACTIVIDADES DE CAMPAÑA EN UN COMANDO PRESIDENCIAL ASEVERANDO QUE SU MOTIVACIÓN ES QUE EN EL PRÓXIMO MANDATO PRESIDENCIAL SE CONTINÚEN LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR LA CARTERA A LA QUE SE PERTENECE, EN VEZ DE RENUNCIAR AL CARGO.

Valparaíso, jueves 26 de noviembre de 2021

SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Senadora de la República, domiciliada para estos efectos en el edificio del Congreso Nacional ubicado en Avenida Pedro Montt S/N, Valparaíso, al Señor Contralor General de la República señor JORGE BERMÚDEZ SOTO, expongo lo siguiente:

1. Como es de público conocimiento la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza comunicó este viernes que pidió un permiso sin goce de sueldo, a partir de este lunes, para sumarse a la campaña del abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.
2. Señaló que efectivamente el candidato Kast la llamó a participar de su campaña y que aceptó sumarse por tres semanas a la campaña “para asegurar que desde su candidatura se puedan seguir tomando todas las medidas de salud pública en relación a la pandemia”. Y que , “desde mi rol va a ser fundamental que se continúe con todas las estrategias que estamos implementando el día de hoy”.
3. Tales declaraciones las hace “desde la subsecretaría de Salud Pública, en su calidad de subsecretaria”, y en un punto de prensa junto al Ministro de Salud, Enrique Paris, y en Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
4. Con ello, la Subsecretaria manifiestamente infringe el principio de prescindencia política al manifestar que es “su responsabilidad como actual Subsecretaria de Salud Pública” “asegurarse que las políticas de manejo de la pandemia se continúen”, y que para ello necesita sumarse a una determinada campaña presidencial. Con ello , envía el mensaje de que la actual gestión en salud en materia de COVID-19 continuará, y que ellos será si en una determinada opción presidencial, insinuando que en la opción contraria, no será así.
5. Se encuentre o no gozando de un permiso administrativo, con o sin goce de sueldo, lo cierto es que ella no ha cesado en el ejercicio de su cargo, continúa siendo Subsecretaria de Salud Pública, y usa la labor desarrollada en el ejercicio de dicho cargo para asignar contenidos que la ciudadanía valora como positivos - tal como es la vacunación contra el COVID-19- a la

campana de un determinado candidato, vulnerando el principio de neutralidad. Al señalar que pidió un “permiso” sólo refuerza la idea de que participa en dicha campana en calidad de Subsecretaria.

6. El permiso administrativo es una figura que no exime a las autoridades administrativas que ostentan un cargo publico de su deber de prescindencia política , ni de probidad. Sólo les permite ausentarse por un período desarrollar sus labores diarias, pero no importa una cesación del cargo.
7. **Mediante Instrucción N ° 28. 330 efectuada** con motivo de las próximas elecciones de presidente de la república, senadores, diputados y consejeros regionales, la Contraloría General de la República, se refiere a la PRESCINDENCIA POLÍTICA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, señalando que **la prescindencia política de las autoridades, jefaturas y funcionarios, como servidores públicos, se articula sobre la base de los principios de juridicidad, probidad administrativa y apoliticidad que, consagrados en el ordenamiento jurídico, han sido desarrollados a través de la jurisprudencia administrativa.**
8. En cuanto al principio de juridicidad, este ente contralor señala que, es necesario tener presente que de acuerdo con el anotado principio, contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, y con lo dispuesto en los artículos 2°, 3°, 5° y 7° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, es obligación primordial de los servidores públicos propender al bien común - artículo 1° de la Carta Fundamental-, debiendo cumplir fiel y esmeradamente, dentro de su competencia, las tareas propias de sus funciones a fin de atender en forma eficiente las necesidades públicas a su cargo .Ello no es compatible con su solicitud de permiso administrativo para ausentarse de sus labores, con el fin de favorecer a una determinada campana política haciendo primar intereses particulares sobre el interés general.
9. A su vez, conforme al Principio de Probidad Administrativa, debe considerarse que, conforme con lo prescrito en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones. Y el inciso segundo del artículo 52 de la aludida ley N° 18.575, previene que ese principio consiste en observar

una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

10. Resulta obvio que el cumplimiento de tal principio se extiende a todo el período en que se desarrolla una función o cargo público, y que ,en consecuencia, ellas deben ser probas y hacer un desempeño leal de su cargo, aún cuando se encuentren con licencias o se encuentre con un permiso administrativo. En tales circunstancias ,estas no han dejado de ser autoridades públicas.
11. Para mayor precisión, el artículo 53 de la citada ley N° 18.575 agrega que el interés general “se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas” , y no resulta recto ni correcto que una autoridad que ostenta un cargo público , de presencia nacional y alta exposición mediática, aproveche dicha connotación para actuar en favor de una determinado interés político.
12. El artículo 53 de la citada ley N° 18.575, precisa además, que el interés general se expresa “en lo razonable e imparcial de sus decisiones”. Y asimismo, debe tenerse en consideración que el artículo 19 de la mencionada ley N° 18.575, señala que "el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración".
13. De lo anterior se desprende que los cargos públicos que sirven funcionarios, y autoridades, deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone al respectivo servicio. Por lo mismo , es lícito preguntarse si una autoridad publica actúa razonablemente , y de modo imparcial, cuando decide , no ya usar tiempo de su jornada laboral para dedicarse a actividades políticas, sino que decide pedir permiso para “dejar de cumplir su trabajo” , y dedicarse por completo a actos de campaña política. Más cuando el objetivo declarado para hacerlo es “la continuidad” de determinadas políticas del actual gobierno.
14. El funcionario público, en el desempeño de su cargo -que no termina por encontrarse en goce de un permiso administrativo- no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de ese empleo para favorecer o perjudicar a

determinada candidatura, tendencia o partido político. Más aún si luego de “dar primacía a intereses privados” , pretende continuar en su ejercicio.

15. Tal como lo señaló este contralor, en Dictamen N ° 6.591/2000, “el principio de probidad administrativa encuentra aplicación en todas las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado y de sus agentes, los que deben ajustarse a él, de modo de hacer primar siempre el interés general por sobre el particular”. Ello incluye la solicitud de permisos administrativos, y su actuación durante el disfrute del mismo.

En razón de los antecedentes antes expuesto, solicito a usted emitir un pronunciamiento sobre eventual afectación del principio de probidad en el ejercicio del cargo público en el caso de la Subsecretaria Pula Daza , al solicitarse permiso sin goce de sueldo con el fin de asumir actividades de campaña en un comando presidencial aseverando que su motivación es que en el próximo mandato presidencial se continúen las políticas implementadas por la cartera a la que se pertenece, en vez de renunciar al cargo. Y , a la vez, proceda a la apertura del sumario correspondiente en caso de considerarse cometida dicha infracción.
